



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS  
SANTIAGO DE CALI**

Acción de Tutela

**Radicación: 76001 4303 002 2023 00168 00**

**Accionante: MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO**

**Agente Oficioso: JAIR ANDRES VALENCIA**

**Accionado: E.P.S. EMSSANAR S.A.S.**

Sentencia de primera instancia **#169**.

Santiago de Cali, veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Procede el despacho a dictar Sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela instaurada por el señor **JAIR ANDRES VALENCIA**, en calidad de agente oficioso de la señora **MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO**, contra **E.P.S. EMSSANAR S.A.S.** mediante la cual solicita la protección de los derechos de fundamentales a la salud y la vida digna, los cuales considera que han sido vulnerados por parte de la entidad accionada.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

En atención al escrito allegado al Despacho, se advierte que el señor JAIR ANDRES VALENCIA, agente oficioso de la accionante, indica que la señora MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO es una paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson e incontinencia urinaria, por lo que los galenos tratantes le han ordenado los siguientes insumos y medicamentos, los cuales no ha sido posible que la E.P.S. EMSSANAR S.A.S. realice su entrega, a saber:

- PAÑALES TALLA L 120 UNIDADES.
- ROTIGOTINA 2 MG PARCHE TRANSDERMICO CONC: 2MG, 30 PARA UN MES, 90 PARA 3 MESES.

En consecuencia, solicita tutelar los derechos fundamentales de la accionante y ordenar a la E.P.S. EMSSANAR S.A.S, que autorice tanto la entrega del medicamento que requiere la paciente para el manejo de la enfermedad de Parkinson, así como el suministro de los pañales para el manejo de la incontinencia urinaria. Igualmente, solicita una ATENCIÓN INTEGRAL a favor de la accionante.

**ACTUACIÓN PROCESAL**

La presente acción de tutela fue admitida mediante auto No. T-302 del 10 de julio de 2023 contra E.P.S. EMSSANAR S.A.S, y a su vez se dispuso la vinculación de las siguientes entidades: HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, ADRES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – FOSYGA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, y SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, para que en el término perentorio de un (1) día se sirvieran dar las explicaciones que consideraran necesarias respecto a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.

Asimismo, el Despacho ordenó la notificación personal del agente especial designado de E.P.S. EMSSANAR S.A.S., Dr. JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN, con C.C. 10.536.147, atendiendo a la asignación y toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de E.P.S. EMSSANAR S.A.S., por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución No.

202232000000292-6 del 2 de febrero de 2022 así como también la notificación al y al Doctor JOSE EDILBERTO PALACIOS LANDETA, con C.C. 79.596.907, quien se encuentra encargado de la representación judicial para los asuntos relacionados con acciones constitucionales de tutela de carácter administrativo, de salud y de afiliaciones de E.P.S. EMSSANAR S.A.S., según la CIRCULAR EXTERNA RLAT -01-2022.

Posteriormente, el Despacho mediante auto No. T-334 del 21 de julio de 2023, resolvió vincular al presente trámite tutelar a FARMART LTDA IPS y al HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE, para que en el término perentorio de cuatro (4) horas se sirvieran dar las explicaciones que consideraran necesarias respecto a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL ACCIONADO E.P.S. EMSSANAR S.A.S.**

La entidad accionada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 43 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 09 de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO**

La entidad vinculada guardó silencio frente a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

La IPS vinculada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 7 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 10 de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO ADRES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – FOSYGA**

La entidad vinculada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 47 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 14 de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD**

La entidad vinculada guardó silencio frente a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI**

La entidad vinculada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 14 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 08 de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

La entidad vinculada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 31 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 07 de la presente acción de tutela.

#### **RESPUESTA DEL VINCULADO FARMART LTDA IPS**

La entidad vinculada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 20 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 13 de la presente acción de tutela.

## RESPUESTA DEL VINCULADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

La entidad vinculada guardó silencio frente a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.

### PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a esta instancia judicial establecer si **i)** se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que en su escrito de contestación la E.P.S. EMSSANAR S.A.S. indica que ha autorizado lo requerido por la accionante, o si por el contrario, **ii)** se continúa vulnerando a la señora MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO su derecho fundamental a la SALUD y a la VIDA DIGNA, por parte de la entidad accionada, o en su defecto, por alguna de las vinculadas, al someterla a dilaciones administrativas y esperas injustificadas para autorizar y entregar los siguientes insumos y medicamentos: *“pañales talla L 120 unidades y rotigotina 2 mg parche transdérmico”*, los cuales fueron ordenados por los galenos tratantes mediante ordenes médicas del 24 de mayo de 2023 y 21 de abril de 2023, respectivamente.

### CONSIDERACIONES

Este juzgado es competente para conocer y adelantar la presente acción de tutela, con fundamento en lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, el cual indica en su artículo primero que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”.

A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, debemos detenernos en el derecho fundamental que se predica vulnerado, con ello se ubica el hecho en el derecho a la igualdad, dignidad humana, salud y vida, que se encuentra previsto constitucionalmente en los artículos 13, 1, 49 y 11 de la Constitución Política.

Mediante la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales de carácter fundamental, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión, de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la Ley, razón por la que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86, faculta a todas las personas para reclamar ante los jueces, la protección de sus derechos, mediante la acción de tutela y de acuerdo a su Decreto Reglamentario (2591 de 1991).

Cuando una persona natural o jurídica, acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las etapas procesales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico, y pretender, a través del ejercicio de otra acción (como la tutela), una pronta resolución del conflicto planteado.

Así las cosas, los sujetos procesales están llamados a observar con diligencia y cuidado la Constitución y la ley.

En este sentido, las personas deben acudir al proceso que la ley haya determinado para dirimir los diferentes conflictos, de manera que sólo se podrá hacer uso de la acción de tutela, cuando

no exista en el ordenamiento otro mecanismo judicial o, cuando existiendo, la misma se utilice para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la tutela tiene dos características que la identifican: la subsidiariedad y la inmediatez.

Es subsidiario porque únicamente puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa judicial a su alcance o que, teniéndolo, acuda a la tutela para conjurar la situación de perjuicio irremediable en la que se encuentra. La caracteriza también su inmediatez, puesto que es un mecanismo que opera de manera urgente, rápida y eficaz para proteger el derecho fundamental que ha sido violentado o que se encuentra amenazado.

### **PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA**

El derecho a la salud, se encuentra consagrado en el artículo 49 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA el cual establece:

*“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.*

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Resaltando que la Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”

Frente a este tema la Corte Constitucional se ha pronunciado en muchas ocasiones, para lo cual ha expresado:

*“El derecho constitucional a la salud, reiterativamente asumido como fundamental por esta corporación es, por ende, pasible de ser amparado mediante acción de tutela, en particular cuando se trate de (i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico; y (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de manera urgente, las personas no pueden acceder por incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios.*

*A su turno, la urgencia de la protección del derecho a la salud se puede dar en razón a que se trate de sujetos de especial protección constitucional (menores de edad, personas de avanzada edad, embarazadas, pacientes de enfermedades catastróficas, población carcelaria), o en otras situaciones en que, por argumentos válidos y suficientes, de relevancia constitucional, se concluya que la falta de garantía del derecho a la salud implica un desmedro grave, o amenaza inminente contra otros derechos fundamentales, o un evento manifiestamente contrario a lo que ha de ser la protección del derecho fundamental a la salud dentro de un Estado social de derecho.”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Sentencia T- 781 de 2013.

*“Aunque con sujeción al literal g) del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994, la prestación de los servicios asistenciales a cargo de una EPS se encuentra fijada por el contenido del Plan Obligatorio de Salud, POS, la jurisprudencia ha indicado que, bajo ciertas circunstancias, las empresas prestadoras del servicio de salud deben suministrar fármacos que no se hallen incluidos en el Manual de Medicamentos y Terapéutica, siempre y cuando se cumplan los requisitos jurisprudencialmente indicados al respecto.*

Acorde con la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, la seguridad social en salud en Colombia se rige por el principio de la atención integral, lo que se ve reflejado en los contenidos del plan obligatorio de salud. De acuerdo con este principio, las personas afiliadas al régimen de seguridad social en salud tienen derecho a recibir los servicios de promoción y fomento de la salud, y de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, lo que significa que las empresas promotoras de salud están obligadas a prestar estos servicios a sus afiliados y a los beneficiarios de estos últimos, respetando en todo caso dicho principio de integralidad.

### **PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA**

El derecho a la salud, se encuentra consagrado en el artículo 49 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA el cual establece:

*“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.*

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Resaltando que la Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”

Frente a este tema la Corte Constitucional se ha pronunciado en muchas ocasiones, para lo cual ha expresado:

*“El derecho constitucional a la salud, reiterativamente asumido como fundamental por esta corporación es, por ende, pasible de ser amparado mediante acción de tutela, en particular cuando se trate de (i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico; y (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de manera urgente, las personas no pueden acceder por incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios.*

*A su turno, la urgencia de la protección del derecho a la salud se puede dar en razón a que se trate de sujetos de especial protección constitucional (menores de edad, personas de avanzada edad, embarazadas, pacientes de enfermedades*

*catastróficas, población carcelaria), o en otras situaciones en que, por argumentos válidos y suficientes, de relevancia constitucional, se concluya que la falta de garantía del derecho a la salud implica un desmedro grave, o amenaza inminente contra otros derechos fundamentales, o un evento manifiestamente contrario a lo que ha de ser la protección del derecho fundamental a la salud dentro de un Estado social de derecho.”<sup>2</sup>*

*“Aunque con sujeción al literal g) del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994, la prestación de los servicios asistenciales a cargo de una EPS se encuentra fijada por el contenido del Plan Obligatorio de Salud, POS, la jurisprudencia ha indicado que, bajo ciertas circunstancias, las empresas prestadoras del servicio de salud deben suministrar fármacos que no se hallen incluidos en el Manual de Medicamentos y Terapéutica, siempre y cuando se cumplan los requisitos jurisprudencialmente indicados al respecto.*

*Acorde con la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, la seguridad social en salud en Colombia se rige por el principio de la atención integral, lo que se ve reflejado en los contenidos del plan obligatorio de salud. De acuerdo con este principio, las personas afiliadas al régimen de seguridad social en salud tienen derecho a recibir los servicios de promoción y fomento de la salud, y de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, lo que significa que las empresas promotoras de salud están obligadas a prestar estos servicios a sus afiliados y a los beneficiarios de estos últimos, respetando en todo caso dicho principio de integralidad.*

En la sentencia T-233 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, esta corporación precisó el contenido de este principio:

*“El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento.”*

*Así, la procedencia de la acción de tutela tiene como punto de partida que la falta de suministro del medicamento prescrito por el médico tratante agrave la situación de salud o impida restablecerla, comprometiendo la integridad personal o la pervivencia de quien lo requiere.*

En otras palabras, la inaplicación de la preceptiva legal o reglamentaria toma fundamento cuando la fortaleza vital esté decayendo o se encuentre en riesgo real, y solo con el suministro del fármaco recetado pueda ser protegida, de tal modo que la EPS, cumplidas las demás condiciones, deba proveerlo, así esté fuera del POS<sup>3</sup>.

A partir de la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional definió la fundamentalidad del derecho a la Salud de la siguiente manera:

*“(…) Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud “en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal” para pasar a proteger el derecho*

<sup>2</sup> Sentencia T-781 de 2013.

<sup>3</sup> Sentencia T-781 de 2013.

*“fundamental autónomo a la salud. Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.” (Subraya, negrita y cursiva del Juzgado).*

De este modo el máximo Tribunal Constitucional ha dado un campo más amplio al derecho a la salud sin pretender omitir su carácter de servicio público esencial y derecho prestacional, acentuando en su condición de derecho fundamental autónomo. Por tanto, cuando las autoridades políticas o administrativas competentes sean renuentes o tarden en implementar medidas necesarias para efectivizar este derecho en la práctica, la máxima Corporación Constitucional estableció que a través de la vía de tutela el juez puede disponer su materialización, dada su fundamentalidad, ya que no puede desconocerse la relación existente entre la posibilidad de llevar una vida digna y la falta de protección de los derechos fundamentales. Por ello, en coordinación con el principio de dignidad humana, el derecho a la salud implica la conservación y el restablecimiento del estado de una persona que padece alguna dolencia.

La salud como derecho integral, implica que la atención deba brindarse en la **cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia requeridas**, lo cual conlleva **ofrecer**, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, **todo cuidado, medicamento, intervención quirúrgica, rehabilitación, diagnóstico, tratamiento y procedimiento** que se consideren necesarios para restablecer la salud de los usuarios del servicio.

La jurisprudencia constitucional establece el derecho que a toda persona le **sea garantizada la continuidad del servicio de salud**. Es decir, que una vez que se ha iniciado un tratamiento éste no puede ser interrumpido de manera imprevista, antes de la recuperación o estabilización del paciente. Ahora bien, **no es suficiente que el servicio de salud sea continuo, si no que se preste de manera completa**, por lo tanto es importante que exista una atención integral en salud por parte de todas las EPS, las cuales deben realizar la prestación del servicio, con el propósito de brindar una respuesta efectiva a las necesidades del usuario, lo cual implica brindarle la totalidad de **tratamientos, medicamentos y procedimientos disponibles** basados en criterios de **razonabilidad, oportunidad y eficiencia**.

En la misma Sentencia T-760 de 2008, el máximo Tribunal Constitucional definió y sistematizó las subreglas que imponen al Juez de tutela establecer frente al suministro de medicamentos, elementos, procedimientos, intervenciones y servicios indispensables en la preservación o recuperación de la salud de los pacientes o su vida digna, se debe aplicar en forma directa la Constitución y restringir la aplicación del Plan Obligatorio de salud. Es así que en dicha providencia se concluyó que:

*“(…) debe ordenarse la provisión de medicamentos, procedimientos y elementos que estén excluidos del POS a fin de proteger los derechos fundamentales de los afectados, cuando concurran las siguientes condiciones: “(i) que la falta del servicio o medicina solicitada ponga en riesgo los derechos a la vida e integridad del paciente. Bien sea, porque amenaza su supervivencia o afecta su dignidad; (ii) que el servicio o medicina no pueda ser sustituido por otro que sí está incluido dentro del POS bajo las mismas condiciones de calidad y efectividad; (iii) que el servicio o medicina haya sido ordenado por un médico adscrito a la EPS en la que está inscrito el paciente; y, (iv) que la capacidad económica del paciente, le impida pagar por el servicio o medicina solicitado”. (Subraya y Negrita del Despacho).*

De igual forma, el alto Tribunal Constitucional indicó que el derecho a la salud incluye las siguientes fases: preventiva, reparadora y mitigadora; así lo dijo en la sentencia T-056/16:

“El principio de integralidad en la salud implica prestaciones en las distintas fases: i) preventiva, para evitar la producción de la enfermedad interviniendo las causas de ella; ii) **curativa que requiere suministrar las atenciones necesarias para que el paciente logre la cura de la patología que padece;** y iii) **mitigadora que se dirige a paliar las dolencias físicas o psicológicas que ocurren por los efectos negativos de la enfermedad, en tanto además de auxilios fisiológicos debe procurarse las condiciones de bienestar en ámbitos emocionales y psicológicos.**” (Subraya y negrita del Juzgado).

De otro lado, en innumerables ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la inaplicación en ciertos casos de la reglamentación de un tratamiento o medicamento requerido o suministrado a fin de garantizar el goce efectivo de las garantías constitucionales, debido a que los derechos deben ser protegidos de manera cierta y real, aun cuando se vaya en contra de reglamentaciones que obstaculicen su eficacia, puesto que la vigencia y cumplimiento de las garantías constitucionales priman sobre cualquier orden jurídico.

Igualmente, respecto a las personas de la tercera edad, así como también niños y aquellas que padezcan **enfermedades catastróficas** ha elevado la protección constitucional, es por ello que la Honorable Corte Constitucional ha considerado que por su especial condición se impone la protección que a su favor contiene el artículo 46 de la Constitución, especialmente por el vínculo que une a la salud con la posibilidad de llevar una vida digna, como se hizo constar en la sentencia T-1087/2007.

Se reitera entonces, que las instituciones de salud no están autorizadas para evadir y mantener indefinidamente en suspenso e incertidumbre al paciente que acredita y prueba una urgencia vital y la necesidad la entrega de unos insumos como en este caso.

### **EL PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE DERECHO A LA SALUD**

1. La jurisprudencia de la Corte ha recalcado en varias ocasiones<sup>4</sup> que el ordenamiento jurídico colombiano ha prescrito que el derecho a la salud debe prestarse conforme con el principio de atención integral.

El numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993, enuncia este principio:

*“El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”.*

De igual forma, el literal c del artículo 156 de la misma ley dispone que:

*“Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médica quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.”*

Así mismo, en la sentencia T-576 de 2008 se precisó el contenido de este principio:

*“16.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la forma como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones en materia de salud y por la*

<sup>4</sup> Sentencia T-574 de 2010.

*jurisprudencia constitucional colombiana. En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados, así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la (sic) paciente<sup>5</sup>*

*17.- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento<sup>6</sup>.<sup>7</sup> (Subrayado fuera del texto original).*

En esta sentencia también se precisaron las facetas del principio de atención integral en materia de salud:

*“A propósito de lo expresado, se distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud. Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las personas en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo, educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social, para nombrar sólo algunos aspectos.<sup>8</sup> La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente.”*

2. La jurisprudencia constitucional ha aplicado este principio en diferentes casos, principalmente referentes a enfermedades físicas. (...)

Al respecto, resulta fundamental mencionar además la sentencia T-565 de 2010, la cual aclaró el panorama en materia de prestación de servicios de salud que se encuentran por fuera del POS, en los casos en que no hay orden del médico tratante que indique que determinado tratamiento es necesario para la salud del paciente. (...)

En este caso consideró la Corte lo siguiente:

*“(...) 5. Por otra parte, en la sentencia T-760 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa) esta Corporación señaló que por regla general los servicios de salud requeridos por una persona deben ser prescritos por el médico tratante adscrito a la EPS. Sin embargo, también estableció que “en el evento excepcional de que el interesado acuda a un médico externo – no adscrito a la red de prestadores de la correspondiente EPS– la EPS tiene una carga de valoración del concepto de dicho médico. El concepto del médico externo no podrá ser automáticamente descartado*

5 Consultar Sentencia T-518 de 2006.

6 Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000.

7 En el mismo sentido ver las sentencias T-053 de 2009, T-760 de 2008, T-1059 de 2006, T-062 de 2006, entre otras.

8 Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-307 de 2007, T-016 de 2007 y T-926 de 1999, entre otras.

*por la EPS, sino que es necesario una valoración de su idoneidad por parte de un médico adscrito a la EPS (de manera directa o mediante remisión del interesado) o del Comité Técnico Científico, según lo determine la propia EPS". En ese sentido, no puede una entidad desconocer el concepto de un médico externo, y negar, como se hizo en el caso bajo estudio, el acceso a dicho servicio; por el contrario, debe adoptar las medidas adecuadas y necesarias, que incluyen valoración por especialistas adscritos a la entidad y estudio detallado de la historia médica del paciente, para finalmente establecer, si efectivamente se requiere el servicio de salud en cuestión. (...)*

*7. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, es indudable que el tratamiento integral, dentro del cual se encuentra la "musicoterapia, animal terapia, equinoterapia", son necesarios para "garantizar el derecho fundamental a la salud de la niña y su adecuado desarrollo armónico e integral", en tanto que "mejora la calidad de vida, pues los síntomas de la enfermedad se controlan más rápidamente" y adicionalmente mejora el estado físico, el equilibrio, la coordinación, los reflejos, el tono muscular, la circulación, la concentración, la memoria, el autocontrol de las emociones, los movimientos, la comunicación gestual y oral, disminuye la ansiedad, fomenta la autoconfianza, la autoestima y el desarrollo humano. De no practicarse el tratamiento integral, de acuerdo con su médico tratante, se le estaría negando a la menor la posibilidad de rehabilitación que incide en su calidad de vida, "ya que en esta etapa del ciclo de vida es posible que se dé la plasticidad cerebral y esto contribuya al mejoramiento de la salud de la paciente".*

3. Es posible concluir entonces que, hay eventos en los que es necesario que el juez ordene a la EPS que preste un determinado tratamiento que resulta de vital importancia para el paciente y que no está incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud ni ha sido ordenado por el médico tratante, tal y como lo estableció la jurisprudencia anteriormente citada, que resulta plenamente aplicable al caso bajo estudio.<sup>9</sup>

### **CASO CONCRETO**

Descendiendo al caso sub examine, el señor JAIR ANDRES VALENCIA, en calidad de agente oficioso de la señora MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO, presenta acción de tutela solicitando que la E.P.S. EMSSANAR S.A.S, le autorice y entregue los siguientes insumos y medicamentos: "pañales talla L 120 unidades y rotigotina 2 mg parche transdérmico", los cuales fueron ordenados por los galenos tratantes mediante órdenes médicas del 24 de mayo de 2023 y 21 de abril de 2023, respectivamente.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta los soportes que obran en el presente trámite, se constata efectivamente lo siguiente:

- El día 21 de abril de 2023, la accionante acudió al HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE para consulta con médico especialista en psiquiatría, quien le ordenó el medicamento *rotigotina 2 mg parche transdérmico* para el manejo de su enfermedad de Parkinson.
- El día 24 de mayo de 2023, la actora acudió al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para consulta con médico especialista en urología, quien le ordenó *pañales talla L 120 unidades* para el manejo su incontinencia urinaria.

---

<sup>9</sup> Sentencia T- 676 de 2011.

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE 890304155 (ARFor)

FORMULA MEDICA AMBULATORIA

Paciente: CC 66807529 MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO Fecha: 21  
 Edad: 53 AÑOS Empresa: EMSSANAR S.A.S. SUBSIDIADO Hora: 12  
 Dx Principal: G20X ENFERMEDAD DE PARKINSON Página: 1  
 Dx Relacionado: F322 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS Vigencia: 9  
 Dx Relacionado: F064 TRASTORNO DE ANSIEDAD ORGANICO  
 Folio No. 11 Fecha de Formulación: 21/04/2023 12:11:48

\*66807529\$11\*

No.	Acción	Descripción	Dosis	Vía	Frecuenc.	Días Tra
1	NUEVO	ROTIGOTINA 2 MG PARCHE TRANSDERMICO CONC: 2 mg FOR MA PARCHE TRANSDERMICO	2,00 MC	LOCAL	24 Horas	30
Indi: 1 PARCHE DIARIO, 30 PARA 1 MES, 90 PARA 3 MESES						

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS CALI - LARTAGO ORDEN MEDICA

CÓDIGO: CEXT-F-34-001 VIGENCIA: FEBRERO - 2023 VERSIÓN: 02

FECHA: 5/23/24 HORA: N° DE HISTORIA CLINICA: 80596  
 NOMBRE: María Rodríguez SEXO: M  F   
 SERVICIO: CAMA: CÓD. MEDICO:

IMAGEN DIAGNOSTICA:  INTERCONSULTAS:   
 EXAMEN LABORATORIO:  URGENTE:  REGULAR:   
 FORMULA:  DE: PARA:

Parcial adulto talla  
 Unidades 120.  
 Antecedente Parkinson  
 Incontinencia Urinaria

PAÑALES FOR 5271  
 3 JUNIO - 2023  
 PENDIENTE  
 FARMART

FIRMA Y SELLO MEDICO

De igual manera, la E.P.S, EMSSANAR S.A.S, a través de la contestación allegada al juzgado, informó lo siguiente:

“El medicamento ROTIGOTINA PARCHE TRANSDERMICO, PBSUPC Res. 2808 del 2022, se revisa la bandeja de solicitudes en Conexia Lazos y el medicamento se autorizó según NUA 2023001158258 para FARMART LTDA IPS - CALI (VALLE). PAÑALES, es necesario aclarar inicialmente que la orden medica realizada por médico especialista en UROLOGIA del 24/05/2023 NO cumple con Decreto 2200 del 2005 ya que no describe el TIEMPO DE TRATAMIENTO, NI la PERIODICIDAD de USO, NI tampoco se prescribe por MIPRES, considerando que los PAÑALES NO hacen parte de la cobertura del PBSUPC Res. 2808 del 2022, pero de acuerdo a la Res. 2438 del 2018 MIPRES RÉGIMENSUBSIDIADO, la solicitud de los servicios NO PBS debe ser realizada por el profesional de la salud tratante a través del aplicativo MIPRES establecido por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, para el posterior direccionamiento por parte de la EPS, tal como fue realizada por MEDICINA GENERAL el día 31/05/2023 en ESE RED DE SALUD DEL NORTE HOSPITAL JOAQUINPAZ BORRERO - CALI (VALLE) Pag. 12; se revisa MIPRES.COM y la prescripción de PAÑALES realizada el día 31/05/2023 se encuentran direccionados MIPRES No. 20230531144036012743 para FARMART LTDA IPS - CALI (VALLE). Considerando la MEDIDA PROVISIONAL se solicita al área de soluciones especiales gestionar las entregas pendientes del medicamento ROTIGOTINAPARCHE TRANSDERMICO y PAÑALES.”.



Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho se comunicó con el señor JAIR ANDRES VALENCIA, hijo de la accionante MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO, al abonado 3153450986, quien manifestó que los pañales que requería su señora madre le fueron entregados y a la fecha se encuentra pendiente por parte de FARMART LTDA IPS la entrega del medicamento *rotigotina 2 mg parche transdérmico*.

Así las cosas, encuentra este Juzgado que si bien es cierto que la E.P.S. EMSSANAR S.A.S. autorizó y direccionó el suministro de los *pañales talla L 120 unidades* y el medicamento *rotigotina 2 mg parche transdérmico* hacia FARMART LTDA IPS, también es cierto que durante el trámite constitucional la E.P.S. EMSSANAR S.A.S., en conjunto con su prestador materializaron la entrega de los pañales que reclamaba la accionante, por lo tanto, esta solicitud se encuentra satisfecha por parte de la entidad accionada y la misma se negará por carencia actual de objeto por hecho superado; no obstante, se observa que no ocurre lo mismo respecto del medicamento *rotigotina 2 mg parche transdérmico*, el cual a la fecha NO ha sido entregado a la accionante, por lo que esta instancia judicial ordenará a la E.P.S. EMSSANAR S.A.S., que materialice su entrega, dado que las Entidades Promotoras de Salud no sólo tienen la obligación de autorizar los medicamentos que requieren sus afiliados sino que su deber también se extiende hasta su materialización, la cual se cumple con la entrega real y efectiva de lo requerido por el paciente.

De otro lado, abordándose la pretensión referente que se ordene el TRATAMIENTO INTEGRAL a favor de la accionante, el Despacho para determinar su viabilidad, tendrá en cuenta las pruebas aportadas y los criterios de la Jurisprudencia frente al tema.

Así pues, se ha expuesto que el tratamiento integral implica que se garantice la integridad física y mental en todas las facetas, esto es, antes, durante y después de exteriorizar una enfermedad o patología, de manera integral y sin fragmentaciones hasta el restablecimiento de la salud.

Sin embargo, para que sea concedido el tratamiento integral, debe el caso particular ajustarse a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, para que un juez de tutela ordene el tratamiento integral a un paciente, bajo las siguientes circunstancias:

**“(i) que la EPS haya actuado con negligencia en la prestación del servicio, como ocurre, por ejemplo, cuando demora la programación de procedimientos quirúrgicos o tratamientos médicos; y (ii) que existan las ordenes correspondientes, emitidas por el médico, especificando los servicios que necesita el paciente”<sup>10</sup>.**

<sup>10</sup> Sentencia T-228-2020.

*“Entre las circunstancias en las que procede su reconocimiento se encuentra cuando **el peticionario es un sujeto de especial protección constitucional**, como es el caso de las personas en situación de discapacidad física”<sup>11</sup>.*

*“Por lo general, se ordena cuando (i) la entidad encargada de la prestación del servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente. Igualmente, se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de especial protección constitucional (**como sucede con los menores de edad, adultos mayores**, indígenas, desplazados, personas con discapacidad física o que padezcan enfermedades catastróficas); o con aquellas (iii) personas que *“exhiben condiciones de salud extremadamente precarias e indignas”*<sup>12</sup>*

Al respecto, de la valoración probatoria se constata que la EPS actuó de manera negligente e impuso trabas administrativas, por cuanto no solo debía autorizar si no velar por la entrega real y efectiva del medicamento *rotigotina 2 mg parche transdérmico*, el cual fue prescrito por el médico tratante, tal y como consta en las ordenes médicas que obran en el presente trámite, igualmente, la accionante es un sujeto de especial protección constitucional por presentar una ENFERMEDAD CATASTROFICA O RUINOSA COMO LO ES EL PARKINSON, por lo que requiere una atención integral, para evitar posibles perjuicios irremediables que afecten su salud por la ineficiente prestación del servicio de salud; y, *con el fin de evitar futuras acciones de tutela en las que tenga que incurrir la accionante, sin justificación constitucionalmente razonable.*

En consecuencia, se ordenará el tratamiento integral únicamente frente a lo que se derive del diagnóstico de los diagnósticos de “ENFERMEDAD DE PARKINSON, EPISODIOS DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMA PSICOTICOS, TRASTORNO DE ANSIEDAD ORGANICO e INCONTINENCIA URINARIA”.

Al momento de notificar este fallo, se le hará saber a los interesados, el derecho que les asiste a impugnarlo dentro de los tres días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

En caso de que este fallo no fuere impugnado, se remitirán las presentes diligencias, al día siguiente del vencimiento de la ejecutoria formal, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: TUTELAR** el derecho fundamental a la **SALUD y VIDA DIGNA**, de la señora **MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO**, identificada con la C.C. N° 66.807.529, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** al representante legal de **E.P.S. EMSSANAR S.A.S.**, o quien haga sus veces, que en el término de **cuarenta y ocho (48) horas** contadas a partir de la notificación de la presente providencia, y sin dilaciones de índole administrativo, **AUTORICE, REALICE Y EFECTIVICE** la entrega del medicamento *rotigotina 2 mg parche transdérmico* a favor de la accionante **MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO**, identificada con la C.C. N° 66.807.529.

<sup>11</sup> Sentencia T-001-2021.

<sup>12</sup> Sentencia T-259-2019.

**TERCERO: NEGAR** la solicitud que realiza la accionante **MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO** contra **E.P.S. EMSSANAR S.A.S**, respecto de la entrega de los *pañales talla L 120 unidades* por haberse configurado una carencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO**.

**CUARTO: ORDENAR** a **E.P.S. EMSSANAR S.A.S**, que brinde el **TRATAMIENTO INTEGRAL** a la accionante **MARIA LEIDA RODRIGUEZ TRUJILLO**, identificada con la C.C. N° 66.807.529, únicamente, en relación con los diagnósticos de **"ENFERMEDAD DE PARKINSON, EPISODIOS DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMA PSICOTICOS, TRASTORNO DE ANSIEDAD ORGANICO e INCONTINENCIA URINARIA"**, sin ningún tipo de dilaciones y trabas administrativas frente a tratamientos, insumos, procedimientos y medicamentos que los médicos tratantes le prescriban, lo que deberá ser suministrado de forma oportuna y eficaz con el fin de lograr la recuperación o estabilización integral de la salud de la agenciada.

**QUINTO:** Notifíquese a las partes lo aquí decidido por el medio más expedito y eficaz.

**SEXTO:** En caso de no ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

**SÉPTIMO:** Si este fallo no fuere revisado por la H. Corte Constitucional, una vez excluido **ARCHIVASE**.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE**



**LUIS CARLOS QUINTERO BELTRAN**  
**JUEZ**